

# La inmigración ilegal colapsa las capacidades de acogida e integración pese a su descenso

**El discurso xenófobo de la extrema derecha amenaza con incendiar las calles tanto en España como en el resto de la Unión Europea**

**ANDER AZPIROZ**



MADRID. El descenso de la inmigración ilegal a lo largo de la última década no impide que a día de hoy sea vista como uno de los mayores problemas en todos los países de la Unión Europea. España no es una excepción. Hasta el 15 de agosto llegaron a sus fronteras más de 22.000 personas sin la documentación en regla. Según el barómetro del CIS del mes de julio, la inmigración es la mayor preocupación para los españoles tan solo por detrás de la vivienda y la corrupción.

Un cuarto de siglo después de que se dispararan las llegadas las capacidades de acogida e integración tanto de España como de la UE han quedado obsoletas y desbordadas. Uno de los ejemplos más claros de lo crítico de la situación es la dificultad para proceder al reparto entre comunidades autónomas de los mi-

les de menores no acompañados que se hacinan en Canarias, Ceuta y Melilla.

Los disturbios de tinte racista contra la población inmigrante por la agresión de un ciudadano marroquí a un jubilado en el municipio murciano de Torre Pacheco o las agresiones a menores de un centro de acogida en el barrio madrileño de Hortaleza, tras la supuesta violación por parte de otro de una adolescente de 14 años, son los últimos episodios de una deriva que demuestra la insuficiencia de medios materiales y humanos para afrontar este fenómeno. En opinión de Carmen Egea, profesora de Grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, la solución pasa por «dejar al lado las luchas partidistas y poner en marcha una gestión integral de todas las administraciones». Es justo lo contrario a lo que ocurre con un proceso de distribución de los menores de Canarias, Ceuta y Melilla cuyo camino está jalado por un sinfín de recursos ante la justicia o cruces de acusaciones por las exenciones en el reparto de País Vasco y Cataluña.

A nivel europeo las esperanzas de las instituciones comunitarias están puestas en la entrada en vigor en junio del año que viene del Pacto de Migración y Asilo, un acuerdo de miembros que no dejó contento a ninguno de los estados miembros y del que alguno ya sospecha desvincularse incluso antes de su puesta en funcionamiento. El pacto se sustenta sobre el refuerzo de los controles en frontera y el seguimiento de los inmigrantes ilegales para que no se trasladen de un país a otro una vez dentro de la frontera de la Unión o la garantía de un reparto equitativo de la carga de la inmigración entre los 27. No obstante, Bruselas continuará sin competencias en aspectos básicos como integración, prestación de servicios o seguridad

no es un fenómeno nuevo en Europa. Jean-Marie Le Pen ya disputó en 2002 la Presidencia de Francia a Jacques Chirac defendiendo un programa abiertamente xenófobo. «Lo que sí es novedoso es que todos los partidos han tenido que incorporar la inmigración a su agenda porque es una realidad que está en la sociedad», sostiene la profesora Egea, quien se detiene especialmente en una derecha liberal que ha debido endurecer sus posiciones para frenar la

## El precedente de Le Pen

El auge de las formaciones de extrema derecha al calor del sentimiento anti inmigración

fuga de votos a opciones extremas. Egea también destaca los contrapesos que existen ante los discursos xenófobos. Uno fundamental es el relevo generacional y la disponibilidad de mano de obra para sostener a una población europea cada vez más envejecida. «Lo mismo que un gobernante recibe las críticas de los contrarios a la inmigración también atiende las llamadas del sector de la construcción o la hostelería que necesitan cubrir sus vacantes de empleo», señala la profesora de Relaciones Internacionales.

Con más de 60 millones de inmigrantes en suelo europeo el peligro para Egea no se encuentra en los discursos xenófobos en sí mismos, sino en que estos alcancen el punto crítico de «incendiar las calles».

**La solución pasa por alejar el debate de las luchas partidistas e involucrar en la gestión a todas las administraciones**



Un grupo de inmigrantes abandona Ceuta con destino a la Península. REDUÁN DRIS / EFE

## Los países del sur se convierten en un destino final

**A. AZPIROZ**

MADRID. La exposición de las fronteras según la posición geográfica de cada estado miembro ha dado lugar a la agrupación de países en distintos bloques. Según desgrana la profesora Egea, están los socios del sur que han ejercido tradicionalmente como puerta de entrada y como lugar de primera acogida. Son principalmente Italia, España y Grecia y en los últimos 25 años han convertido en permanente su exigencia de más medios y solidaridad para contener las avalanchas migratorias. En frente han estado los estados del norte, que dada su alta calidad de vida se han erigido en los lugares de destino final y exigen una mayor contención en frontera acompañada del incremento de las devoluciones. Y entre unos y otros desde la crisis de 2015 se han hecho un hueco los países del este, a los que unió su rechazo frontal a las

cuotas de reparto y se han hecho especialistas en alzar la voz. «Los países del norte han disfrutado durante décadas de un estado del bienestar envidiable que con la inmigración ha dejado de dar a basta para satisfacer todas las necesidades de su población, por lo que presionan al sur para que no permita la llegada a su territorio de personas indocumentadas», detalla Egea. No se trata así de bloques ideológicos sino geopolíticos, como demuestra que el Gobierno socialdemócrata de Dinamarca ejerza como un 'halcón' en materia migratoria.

Poco a poco los socios menos aventajados de la UE han acortado las distancias del bienestar con los más ricos y ahora pasan también a convertirse en países de destino final, como le está ocurriendo a España. Esta situación ha provocado el avance en toda Europa del discurso anti inmigración, ya sea ésta de carácter legal o ilegal.